

Ponencia del Partido Comunista Revolucionario (Bolivia) en el 23 Seminario Internacional:
Problemas de la Revolución en América Latina, Julio de 2019, Quito, Ecuador

Los pueblos bolivianos en pie de lucha contra el populismo, el autoritarismo y la represión

*Si está entregando el país
y habla de soberanía
quién va a dudar que usted es
soberana porquería
no me gaste las palabras
no cambie el significado
mire que lo que yo quiero
lo tengo bastante claro
no me ensucie las palabras
no les quite su sabor
y límpiense bien la boca
si dice revolución.*

-Mario Benedetti

Bolivia es un país con una rica historia de luchas sociales contra toda forma de dominación, explotación y opresión. El gobierno de Evo Morales que asumió en 2006 con un aplastante apoyo popular entró en pugna con la oligarquía financiera y terrateniente durante sus primeros años de gobierno hasta la negociación de la nueva Constitución Política del Estado, que representa el inicio de los acuerdos entre el MAS y la oligarquía. A partir del año 2009 el Estado apunta su aparato represivo contra los movimientos populares que protestan contra el modelo extractivista y en defensa de sus derechos colectivos. La derechización y el entreguismo del MAS, mientras mantiene un discurso ‘izquierdista’ presenta un cuadro político complejo en el que los revolucionarios debemos reivindicar nuestras banderas históricas arrebatadas, defender e impulsar la organización social independiente y construir una alternativa patriótica y popular.

Los Primeros Años del “Proceso de Cambio”

El gobierno de Evo Morales asumió el 22 de enero de 2006, como producto de la acumulación histórica de fuerzas del descontento social y de la resistencia anti-neoliberal. El peligro potencial que representaba al momento de asumir el gobierno por su origen popular, llevó a que durante los primeros años de gobierno se polarizara el país, entre la llamada ‘media luna’ gobernada por la oposición derechista y el gobierno central. En abril de 2006 se realizaron las elecciones para assembleístas constituyentes, en las que el MAS-IPSP logra una mayoría simple pero no los dos tercios necesarios para la aprobación, la Asamblea Constituyente fue un foco de conflictos y a pesar de haber sido instalada en la ciudad de Sucre, fue trasladada a un cuartel en la ciudad de Oruro dónde aprobó en diciembre de 2007 la primera versión del texto constitucional, fruto de acuerdos entre el MAS-IPSP, UN y otras organizaciones con representación regional, este texto fue modificado posteriormente por una comisión del Senado con participación del MAS-IPSP y

PODEMOS. Las negociaciones del texto constitucional representaron en los hechos el proceso de negociación del oficialismo y la oligarquía financiera y terrateniente de la ‘media luna’. La polarización con la ‘media luna’ se caracterizó por su discurso racista y regionalista y llegó a su mayor intensidad con los conflictos sociales de 2007-2008, el enfrentamiento del 11 de enero de 2007 en Cochabamba que dejó un saldo de tres muertos, la Calancha en Sucre entre el 24 y el 26 de noviembre de 2007 con un saldo de tres muertos, la Masacre del Porvenir el 11 de septiembre de 2008 con saldo de 19 muertos. Si bien la Constitución Política del Estado, aprobado mediante Referéndum el 25 de enero de 2009 y promulgado el 7 de febrero de 2009 comprendió un avance progresivo en derechos sociales, su esencia fue de respeto a la gran propiedad privada sobre los medios de producción, es decir del sistema capitalista. Luego de la aprobación de la nueva CPE pactada el último golpe para obligar a los sectores más radicalizadas de la oligarquía a entrar en consenso con el gobierno nacional fue el montaje y posterior asalto del gobierno al Hotel Las Américas (16 de abril de 2009), resultando en la muerte de tres supuestos sicarios internacionales contratados por los grupos cívico-prefecturales para un magnicidio. Luego de la aprobación de la nueva Constitución, la oposición burguesa no ha sido capaz de articular un proyecto político nacional, pero esta falta de articulación no se debe únicamente a la incapacidad de los operadores políticos sino a un fenómeno de quiebre orgánico entre la burguesía extraparlamentaria y la oposición burguesa a nivel nacional. La burguesía aún mantiene sus estructuras políticas para la administración política municipal y departamental, sin embargo no considera necesario disputar el poder ejecutivo ya que sus intereses económicos se ven resguardados por el gobierno del MAS, muestra clara es el crecimiento inédito en los sectores agro-industriales y bancarios.

Nueva Constitución Política del Estado: Pacto del MAS con la Oligarquía

Las constantes represiones del gobierno del MAS-IPSP, luego de la aprobación de la nueva CPE, se han desatado contra movimientos sociales, se mencionan algunos de los principales. En 2010 el conflicto entre pobladores de Alto Beni y Caranavi en torno a las promesas electorales de una planta de cítricos resultó en una represión brutal con dos muertos y docenas de detenidos. En 2011 la represión policial contra dirigentes en Mallku Khota (Norte Potosí) resultó en el procesamiento penal del kuraca de Sacaca. En septiembre del mismo año se registró una de las represiones más emblemáticas del gobierno evista, mientras avanzaba la marcha indígena del TIPNIS contra el proyecto de carretera, en Chaparina fueron detenidos al menos 40 dirigentes y lesionados al menos 70 marchistas. Al concluir el año el gobierno lanzó un gasolinazo que provocó una ola de indignación y protestas, se obligó al gobierno a dar un paso atrás y anular la medida, sin embargo el alza de precios de transporte público y otros rubros no se revirtió. En 2012 la represión en Yapacaní en un cabildo que exigía la renuncia de un alcalde masista tuvo como saldo tres muertos. El mismo año se instaló la Vigilia de Luchadores Sociales contra la impunidad, por la justicia y la memoria histórica, exigiendo reparación por la violencia estatal ejercida desde las dictaduras militares, hasta el momento se mantiene la vigilia con más de 25 de los activistas fallecidos y sin alcanzar la reparación exigida. La represión desatada por el gobierno con el objetivo de erradicación de coca en Apolo (Octubre de 2013) con las Fuerzas de Tareas Conjuntas resultaron cuatro muertos, 30 heridos y 17 detenidos, con más de 100 niños

refugiados en la iglesia. El 2014 arranca con la toma de oficinas del CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas) y el intento de toma de oficinas de la APDHB (Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia), consistente con la política de erradicar las organizaciones sociales opositoras o críticas al oficialismo. Al concluir el año las elecciones resultaron en la tercera presidencia de Evo Morales con un respaldo electoral del 61,4%, controlando ambas cámaras con más de dos tercios (al anular dos curules de opositores). Las elecciones sub-nacionales de 2015 en cambio fueron un revés electoral para el oficialismo, ya que la oposición ganó 8 de las 10 principales alcaldías del país.

El movimiento universitario marcó el año 2015 con los conflictos que surgieron en la UMSS (Universidad Mayor de San Simón) generados por la titularización de docentes sin exámenes, se produjo la toma de la Universidad y la constitución de un Consejo Universitario Transitorio, se expandió la protesta a nivel nacional alcanzando una duración de casi siete meses, la represión dejó a trece heridos. El movimiento cívico de Potosí empezó el mes de julio de 2015 con las exigencias de mayor atención para su departamento, luego de un extendido paro cívico partió la marcha rumbo a La Paz llegando fueron recibidos con una fuerte represión. En agosto del mismo año el gobierno intervino la Capitanía Takovo Mora (guaraní) ante las protestas contra la intervención petrolera, fueron detenidos más de 18 personas. El año finalizó con el escándalo de corrupción más grande que había enfrentado el gobierno masista, el FONDIOC (Fondo Indígena) superando los 187 millones de dólares e involucrando más de 200 dirigentes oficialistas.

El año 2016 se sometió a Referéndum la propuesta de modificación del artículo 168 de la CPE para habilitar una segunda re-elección presidencial, el rechazo popular expresado el 21 de febrero dio victoria al No (51,3%), fue una derrota para el oficialismo en medio del escándalo de corrupción de CAMCE-Zapata. La situación socio-económica de las personas con discapacidad les llevó a realizar una serie de protestas que culminaron con una marcha nacional hasta La Paz y la instalación de vigiliadas que fueron recibidas por una represión desmedida. El quiebre y cierre de ENATEX (Empresa Nacional de Textiles) por mal manejo económico dejó a cientos de trabajadores en la calle y generó una masiva protesta fabril bajo la dirección de la COB. Al iniciar la gestión 2017 el magisterio urbano nacional se dirigió en una marcha nacional hasta la ciudad de La Paz exigiendo mejores condiciones laborales y mejor calidad educativa. Las protestas de parte de la población de Achacachi desde agosto de 2017 contra su alcalde corrupto (de filiación oficialista) fueron blanco de la represión policial y la persecución judicial. El polémico Código Penal aprobado por el gobierno que atentaba contra los derechos de los profesionales, el derecho a la protesta y otros generó una aguerrida movilización del sector de salud junto a la COB, en dichas protestas el gobierno violó la autonomía universitaria, lograron doblegarle el brazo a Morales y se abrogó por completo el Código Penal masista. Estas protestas junto a la exigencia de respeto al Referéndum del 21F generaron un ambiente de movilización en la ciudad de La Paz en medio del Rally Dakar y dio como consecuencia la formación de espacios de coordinación de luchas como el CONADE y la Coordinadora Interinstitucional. La arremetida del gobierno fue de armar un Congreso trucho de la COB para asegurar un control total de esta máxima entidad sindical del país. El rechazo popular se volvió a expresar en las elecciones

judiciales de diciembre de 2017 que registraron más del 66% entre votos blancos y nulos, y más del 15% de abstención.

En medio de protestas por mayor presupuesto universitario en mayo de 2018, las fuerzas policiales asesinaron al estudiante Jonathan Quispe de la UPEA y desataron una ola de intensas protestas en la sede de gobierno. La nueva Ley de Coca detonó protestas entre los productores de coca yungueños, dejando un saldo de tres muertos y el arresto del máximo dirigente de ADEPCOCA - Franklin Gutiérrez. La Ley de Organizaciones Políticas aprobada en septiembre de 2018 fue motivo de protestas del movimiento ciudadano por su carácter anti-democrático, esta ley instituyó la elección primaria obligatoria para candidatos presidenciales, cuya primera aplicación a principios de 2019 fue un fracaso rotundo por la muy poca participación. La juventud estudiantil irrumpió en el escenario nacional con el rechazo de los intentos de intervención del gobierno en la FES La Paz y busca recuperar la independencia sindical y demostrar que la juventud no se limita a las expresiones serviles y canallescadas que se encuentran en el MAS-IPSP. La propuesta de nueva Ley de Artistas, junto a la actual Ley del Cine son muestras del intento de censura artística desde el gobierno central por las limitaciones que imponen. Durante todo el gobierno de Evo Morales se ha expresado su esencia machista, misógina y homofóbica, partiendo de los ‘chistes’ denigrantes que el primer mandatario emite en sus discursos llegando a casos de altos funcionarios de gobierno, policías y militares que gozan de impunidad en sus actos de violencia doméstica, violaciones y feminicidios. En 2018 se registraron 111 feminicidios en el país, y no existe ninguna política de Estado eficiente para combatir la violencia de género. En los últimos 10 años en Bolivia no se ha llegado a ninguna sentencia para los crímenes de odio contra la población LGBT.

El gobierno de Evo Morales dio un giro significativo en su alineamiento político a nivel regional a principios del 2019 con la extradición del combatiente italiano - Cesare Battisti, como regalo de investidura para Bolsonaro. El acercamiento entre los gobiernos de Bolivia y Brasil, motivado por la necesidad de asegurar mercados para la exportación del gas, se evidencia con las declaraciones de Bolsonaro condicionando el ingreso de Bolivia al Mercosur al alejamiento del gobierno boliviano del Foro de Sao Paulo. El contexto político de 2019 se halla marcado por la alta electoralización y la falta de entes aglutinadores que unifiquen las luchas sociales. La oposición electoral en sus diversas expresiones centra su discurso en torno a la democracia, sin precisar la esencia o las características de la democracia que buscan. El imperialismo yanqui mediante la Secretaría General de la OEA muestra su contento con la re-re-re-elección del Evo, ya que es garante de la estabilidad de los intereses económicos de las transnacionales.

Las ‘nacionalizaciones’ hechas por el gobierno, fueron de hecho una compra del paquete mayoritario de acciones y la re-negociación de contratos de servicio con empresas transnacionales. Ejemplos de esta práctica son las composiciones accionarias de YPFB Andina (48,3% de sus acciones son propiedad de REPSOL) y YPFB Transierra S.A. (21,49% de sus acciones son propiedad de REPSOL), existen contratos de servicio con empresas transnacionales como Shell, Matpetrol, Petrobras, Pluspetrol, Repsol E&P, Vintage Petroleum, y Total E&P

orientados hacia la exploración y explotación de hidrocarburos incluso en parques nacionales y territorios indígenas. La estabilidad que brinda el gobierno de Evo Morales para sus ‘socios’ transnacionales y acreedores internacionales, junto a los buenos precios de hidrocarburos y minerales que gozaba al inicio del gobierno, permite el flujo económico necesario para las políticas de redistribución económica (bonos, etc).

La gran minería privada representa un dominio del 63,6% del valor de producción mineral en el país, mediante la presencia de grandes transnacionales como la Glencore (Sinchi Wayra), Sumitomo (San Cristóbal), Manquiri y Pan American Silver. En la producción minera el 27,7% corresponde al sector cooperativista, cuya composición varía desde pequeños grupos de subsistencia hasta las grandes cooperativas en las que los socios contratan a empleados sin los mínimos derechos laborales y no cumplen con obligaciones tributarias. La participación estatal en la producción minera es apenas 8,7% mediante la COMIBOL.

Los altos precios internacionales de materia prima que beneficiaron al país durante los primeros años de gestión masista fueron despilfarrados sin haber industrializado el país, en la actualidad para mantener el gasto público se recurre al uso de las reservas internacionales (que han bajado de 15 mil millones de dólares en 2014 a 8 mil millones de dólares en 2018), el incremento de la deuda externa (que fue de 2 mil millones de dólares en 2007 y llega a superar los 10 mil millones en 2018).

El papel de los revolucionarios ante la escalada represiva

Los revolucionarios tenemos que enfrentar diversas coyunturas políticas, desde una comprensión científica de las características de cada una para poder asumir tácticas correctas en cada momento. La escalada represiva que el gobierno del MAS ha desatado contra el movimiento popular a partir de la nueva CPE, junto a la corporativización del movimiento popular y la judicialización de la protesta, obligan a las fuerzas izquierdistas consecuentes en el país a posturas de resistencia y defensa de las libertades democráticas. La derecha tradicional ha tomado como bandera de lucha los resultados del referéndum del 21F (contra la re-elección presidencial) e intenta posicionarse con un discurso que gira en torno a la democracia en abstracto. Los comunistas bolivianos planteamos la necesidad de debatir el significado mismo de la democracia y su esencia de clase, consideramos que la dicotomía del autoritarismo del gobierno y la democracia liberal burguesa es falsa. Los pueblos bolivianos tenemos ricas experiencias de organización democrática desde las bases, como los cabildos, la Asamblea Popular (1970-71) y la Coordinadora del Agua (2000), las cuales orientan hacia un horizonte de construcción de una democracia popular. Debemos fortalecer las organizaciones sociales que mantienen su independencia frente al gobierno e impulsar la recuperación de la Central Obrera Boliviana al servicio de las luchas populares.

El discurso izquierdista desde el gobierno del MAS ha servido el propósito de desorientar al pueblo. El objetivo de los actos de homenaje organizados desde el gobierno (50 años del Che Guevara, 100 años de la Revolución Rusa, 200 años de Marx, etc) no es reivindicar la esencia anti-capitalista de los hitos importantes, sino extirparlos de esa esencia y dejándolos como fechas

históricas vacías. Desde el oficialismo se busca invisibilizar a las organizaciones políticas de izquierda, apropiarse del discurso ‘revolucionario’, de los términos y conceptos marxistas y legitimarse en la palestra internacional como supuestos ‘anti-imperialistas’. Nos han robado a plena luz del día, nos han arrebatado nuestras palabras, nuestras consignas, nuestras banderas. Han ensuciado las hermosas, justas y nobles causas por las que llevamos siglos luchando, las han quitado su sabor. No podemos quedarnos quietos y conformes, debemos reivindicar lo nuestro, debemos recuperarlo. Debemos demostrar que los marxistas-leninistas, seguimos firmes junto a nuestro pueblo en el combate revolucionario contra la farsa populista del gobierno de turno, por una verdadera transformación de nuestro país, por las reivindicaciones democráticas, populares, anti-imperialistas, anti-fascistas y anti-patriarcales.